

La tenencia de la tierra, el obstáculo para el desarrollo

La pobreza rural es un fenómeno que no se mide en la Argentina. Las estadísticas sobre esta realidad no existen, aunque el Banco Mundial, que está haciendo estudios sobre el tema en el país, afirma que aquí la pobreza rural es relativamente mayor que la urbana, y que 1,3 millones de indigentes (números de 2003) residirían en el área rural.

Que el problema no tenga cifras no implica que no tenga intentos de solución. Dos programas, como los Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste (Prodernoa) y su par para el Nordeste, el Prodernea, tratan de disminuir su impacto fomentando la organización de cooperativas de pequeños productores en zonas pobres, capacitándolos y facilitando su acceso al crédito. Y esta semana, Lennart Bage, presidente del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA), de las Naciones Unidas, vino al país a hablar del apoyo de su organismo a un tercer programa argentino para combatir la pobreza rural, el Proderpa, de ayuda a las áreas rurales patagónicas.

"El problema más grande que observamos en la Argentina es la precariedad de la tenencia de la tierra. Hablamos con la gente, con el Gobierno y los técnicos y todos coincidieron en esa evaluación", dijo Bage, que también mencionó como problemas típicos de la falta de desarrollo los problemas de acceso al agua, las viviendas, la falta de cultura organizativa para hacer cooperativas y las dificultades de acceso a la salud y la educación.

"Pero realmente, lo que más nos impresionó es el tema de la propiedad", destacó en varias oportunidades Bage, que dijo haber recibido numerosos comentarios sobre disputas por la tenencia de la tierra. Se sabe que estas diferencias se agudizaron por el avance de la frontera agrícola.

Interrogado sobre si creía que, en ese contexto, los gobiernos debían intervenir para regular la propiedad de la tierra para proteger a las comunidades de campesinos que aún tienen una tenencia irregular, Bage dijo que no conocía en detalle lo sucedido en la Argentina, pero

destacó: "Los gobiernos deben hacerse responsables de los actores más débiles del sistema". "Todo gobierno debe velar por el interés de la ciudadanía, pero especialmente de los más vulnerables. No soy quien para decir cual es la solución, pero tiene que envolver la responsabilidad del Estado sobre los más pobres. Es muy común que haya interés en la expansión de la tierra, pero no puede erradicarse a los pobladores por esto", agregó el experto de las Naciones Unidas.

Contra la marginación

Seguidamente, Bage habló de las implicancias del fomento del desarrollo rural para combatir el aumento de la marginación en las ciudades. "Si no se apuesta a la sustentabilidad del desarrollo y la producción de los campesinos, tendremos un efecto contraproducente doble: esa gente terminará usando inapropiadamente los recursos naturales o se verá forzada a engrosar los cinturones de pobreza de las megaciudades", advirtió.

En este sentido, el titular de la FIDA destacó que no debe verse a los pobres de las áreas rurales como "una carga", sino como la oportunidad de motorizar el desarrollo económico de los países. "Hay mil millones de personas en el mundo dependiendo de la agricultura en áreas rurales. El mundo necesita cada vez más producción, alimentos y combustibles limpios. ¿Por qué no aprovechar este contexto para dar una oportunidad a esas personas, dignificarlas y erradicar la pobreza?", preguntó Bage.

El FIDA apoya en el país cuatro programas: el Programa de Desarrollo de Areas Rurales, Prodear (que recibe US\$ 20 millones y beneficia a 20.000 personas); el Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste, Prodernoa (que recibe del FIDA 17, 5 millones de dólares y beneficia a 6000 familias); su par para el Nordeste, el Prodernea (que tiene 16,5 millones de dólares para 14.000 familias, y vence este año) y, desde esta semana, el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia, el Proderpa, que recibe 20 millones de dólares para 15.000 personas.

Desde 1983, el FIDA ha otorgado al país más de US\$ 84 millones de dólares, lo que implicó cofinanciaciones de parte de los gobiernos nacional y provincial por 70 millones de dólares. El control de la ejecución de los fondos es hecho por la Corporación Andina de Fomento.

Por Mercedes Colombres
De la Redacción de LA NACION